COMUNIDAD REGIONAL
DE APRENDIZAJE EN

Compras Públicas SOSTENIBLES

Aprendizajes comparados de América Latina y el Caribe



COMUNIDAD REGIONAL DE APRENDIZAJE EN

Compras Públicas SOSTENIBLES

Aprendizajes comparados de América Latina y el Caribe

Documento de sistematización de la información obtenida e intercambiada durante las tres sesiones de la Comunidad Regional de Aprendizaje

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México | EcoAdvance – GIZ | 2026

Gobierno de México | Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

Dr. Alejandro Encinas Nájera
Subsecretario de Buen Gobierno

Mtra. Guadalupe Araceli García Martínez
Subsecretaria Anticorrupción

EcoAdvance
ETIQUETADO Y COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

Por encargo de:
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
de la República Federal de Alemania

IKI INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

UN environment programme

Öko-Institut e.V.
Institut für angewandte Ökologie
Institute for Applied Ecology

Contenido

7 Resumen Ejecutivo

8 **1.** Objetivo, alcance y utilidad institucional

10 **2.** Metodología de sistematización

11 **3.** Panorama comparado

12 **4.** Temas tratados en las sesiones de la Comunidad Regional de Aprendizaje

- 4.1. Mecanismos de pronto pago
- 4.2. Contratación pública sostenible con perspectiva de género
- 4.3. Modelos de acompañamiento a proveedores e integridad empresarial

31 **5.** Áreas de oportunidad

32 **6.** Reflexiones



Resumen ejecutivo

La Comunidad Regional de Aprendizaje en Compras Públicas Sostenibles constituye un espacio de cooperación técnica entre Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. La iniciativa, impulsada en el marco del proyecto EcoAdvance de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), busca transformar experiencias nacionales en conocimiento regional útil para el diseño, implementación y mejora de políticas de contratación pública estratégica.

El presente documento sistematiza los aportes compartidos durante las sesiones de la Comunidad en tres ámbitos: mecanismos de pronto pago; contratación pública sostenible con perspectiva de género; y acompañamiento a proveedores e integridad empresarial. Su valor agregado no consiste únicamente en describir experiencias, sino en identificar habilitadores normativos, arreglos institucionales, herramientas operativas, mecanismos de verificación, resultados y desafíos que permitan distinguir prácticas transferibles de aquellas que dependen de condiciones nacionales específicas.



Para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México, los aprendizajes regionales ofrecen insumos para fortalecer la Política General de Contrataciones Públicas, el desarrollo posterior de una política específica de compras sostenibles, la inclusión de mipymes y actores del sector social, la incorporación efectiva de la perspectiva de género, la integridad de la proveeduría y el uso estratégico de datos. La sistematización permite integrar el conocimiento generado a lo largo de las tres sesiones de la Comunidad y reconocer áreas de oportunidad para dar continuidad al intercambio técnico regional.

Esta iniciativa es llevada a cabo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el marco del proyecto EcoAdvance: Etiquetado Ambiental y Compras Públicas Sostenibles, que forma parte de la Iniciativa Internacional por el Clima (IKI) y está financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN) de Alemania. El proyecto es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en colaboración con el PNUMA y el Öko-Institut, y se centra en la promoción de modelos sostenibles de producción y consumo, con especial énfasis en el fortalecimiento del etiquetado ambiental de tipo I y de las compras públicas sostenibles.



Mensaje central

La contratación pública sostenible requiere articular reglas claras, capacidades institucionales, herramientas digitales, acompañamiento a proveedores y mecanismos de verificación. La innovación regional surge de combinar estos elementos, no de replicar aisladamente una medida nacional.

1 Objetivo, alcance y utilidad institucional



El objetivo de esta sistematización es transformar el conocimiento generado de la Comunidad Regional de Aprendizaje en un insumo para la toma de decisiones en donde se están implementando las compras públicas sostenibles. El documento busca: i) ordenar la información compartida por los países; ii) identificar autoridades responsables, fundamentos normativos e instrumentos de implementación; iii) reconocer buenas prácticas; y iv) formular opciones de política pública y cooperación regional.

El producto se concibe como un documento técnico regional de aprendizajes comparados. Puede utilizarse como material de consulta para autoridades rectoras, unidades compradoras, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y actores de mercado, así como base para orientar la continuidad de los trabajos de la Comunidad Regional de Aprendizaje.

La sistematización no pretende emitir una evaluación de desempeño de los países ni sustituir la revisión jurídica de sus marcos nacionales. Las referencias normativas e institucionales reflejan la información compartida en las sesiones.


PROYECTOS

2 Metodología de sistematización

La información fue organizada mediante una lectura cualitativa y comparada de las intervenciones realizadas en las sesiones de la Comunidad. Para homologar el análisis, cada experiencia nacional se examina, en la medida en que la información disponible lo permite, conforme a los siguientes criterios:

- Autoridad o institución responsable.
- Marco normativo o instrumento de política aplicable.
- Mecanismo operativo y herramientas tecnológicas.
- Mecanismos de verificación, seguimiento o sanción.
- Resultados o avances reportados.
- Desafíos de implementación y condiciones de replicabilidad.



3 Panorama comparado

Tema	Tendencia regional	Experiencias destacadas	Implicación para la cooperación
Pronto pago	Pasar de plazos legales a sistemas trazables y exigibles.	Chile: transparencia y sanciones; Brasil: pagos digitales; Costa Rica: proyecto de Ley del Expediente N.º 22.736 (anticipos); México: mayor certeza normativa.	Desarrollar indicadores regionales de tiempo de pago y guías para mipymes.
Perspectiva de género	Transitar de principios generales a criterios verificables durante todo el ciclo contractual.	Chile y Colombia: identificación y datos; Brasil: acciones afirmativas; Costa Rica: criterios sociales en las contrataciones públicas y capacitación.	Construir una caja de herramientas regional con definiciones, evidencias y cláusulas modelo.
Proveedores e integridad	Combinar inclusión y acompañamiento con estándares de integridad proporcionales.	México: acompañamiento segmentado; Chile: pactos de integridad; Costa Rica: metodología de análisis de riesgos; Brasil: planeación e inclusión.	Diseñar modelos escalonados de integridad y madurez para proveedores, con especial atención a mipymes.





4 Temas tratados en las sesiones de la Comunidad Regional de Aprendizaje

4.1. Mecanismos de pronto pago

Los mecanismos de pronto pago constituyen un elemento fundamental para la consolidación de sistemas de compras públicas sostenibles, en tanto inciden directamente en la liquidez, estabilidad financiera y capacidad operativa de los proveedores, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de las organizaciones del sector social. El pago oportuno no solo fortalece la confianza en las instituciones públicas, sino que también amplía la base de proveedores, fomenta la competencia y contribuye a una mayor inclusión económica.

Asimismo, el pronto pago se vincula estrechamente con la integridad en la contratación pública, ya que reduce espacios de discrecionalidad y riesgos de prácticas indebidas asociadas a la liberación de recursos. Desde una perspectiva de sostenibilidad, garantizar flujos financieros oportunos permite a los proveedores cumplir con estándares sociales y ambientales, evitando que los retrasos en pagos afecten su capacidad de operación o los obliguen a asumir costos financieros adicionales. En este sentido, los mecanismos de pronto pago se posicionan como un habilitador clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la contratación pública.

CHILE

Chile ha avanzado en la modernización de su marco normativo para garantizar el pago oportuno, mediante la modificación de la Ley No. 19.886 , que establece un plazo obligatorio de pago de 30 días para transacciones públicas y privadas. En el caso del sector público, se contemplan excepciones específicas, como el sector salud, donde el plazo puede extenderse hasta 45 días, y casos fundados en los que puede alcanzar hasta 60 días, siempre que estén debidamente justificados.

El incumplimiento de estos plazos genera consecuencias financieras y administrativas, incluyendo el pago de intereses, una comisión de recuperación del 1% del monto adeudado y la eventual responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en retrasos reiterados. Asimismo, la normativa prohíbe cláusulas abusivas que busquen retrasar indebidamente los pagos o modificar unilateralmente las condiciones contractuales.

A nivel operativo, Chile ha desarrollado herramientas tecnológicas que fortalecen la trazabilidad y eficiencia de los pagos. Entre ellas destacan el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que integra procesos de aceptación, devengo y control presupuestario; el sistema de pago centralizado de la Tesorería General de la República (TGR), que automatiza transferencias; y la ficha de comprador de ChileCompra, que visibiliza los tiempos de pago y reclamos por organismo comprador, facilitando la toma de decisiones de negocios por parte de los proveedores.

No obstante, persisten desafíos relevantes, como la necesidad de homologar los sistemas de gestión de entidades que no utilizan plataformas integradas, particularmente a nivel municipal; mejorar la calidad de los registros de recepción y aceptación; fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción; y consolidar una cultura institucional de pago oportuno.





BRASIL

Brasil ha incorporado mecanismos innovadores para agilizar los pagos en la contratación pública, destacando la implementación de la plataforma "Contrata + Brasil" a partir de 2025, la cual permite gestionar de manera integral el ciclo de pago, desde la presentación hasta la ejecución del mismo. Este sistema establece un plazo de pago de hasta 10 días hábiles tras la recepción de la factura, lo que representa un avance significativo en la reducción de tiempos.

Un elemento distintivo del modelo brasileño es la integración con el sistema de pagos electrónicos "Pix", que permite transferencias inmediatas utilizando identificadores simples como número telefónico, Registro de Personas Físicas (CPF, por sus siglas en portugués)o correo electrónico. Esta herramienta, ampliamente adoptada en el país, facilita la ejecución ágil y segura de pagos a proveedores.

Adicionalmente, se ha desarrollado un mecanismo de pago directo mediante una tarjeta habilitada por el Banco Central, que permite a los proveedores recibir recursos de forma inmediata a través de la plataforma, evitando demoras tradicionales en los procesos de pago. Este esquema ha sido implementado inicialmente en sectores como el suministro de alimentos, beneficiando especialmente a agricultores.

El modelo brasileño se encuentra en expansión, con nuevas fases previstas que buscan ampliar su alcance, incrementar la transparencia y reducir la carga burocrática en los procesos de contratación pública.



COSTA RICA

Costa Rica cuenta con disposiciones normativas que permiten la implementación de mecanismos de pago anticipado, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 20 de su Reglamento, normativa vigente desde diciembre de 2022. Estos pagos anticipados están condicionados a su inclusión en los pliegos de condiciones y a su justificación en función de los costos de producción del bien o servicio.

De manera complementaria, mediante el proyecto de ley en trámite, denominado Ley de Protección del Derecho de Cobro Pronto y Cumplido de los Proveedores de Bienes y Servicios (Expediente Nº 22.736), se encuentra en proceso de discusión una iniciativa legislativa orientada a garantizar el derecho al pago pronto y cumplido de los proveedores del Estado, con especial énfasis en la protección de las mipymes. Esta propuesta plantea la reducción de los plazos máximos de pago a 45 días naturales, así como la incorporación de mecanismos sancionatorios.

No obstante, en la práctica, se han identificado desafíos relacionados con la oportunidad de los pagos a proveedores, lo que puede afectar su sostenibilidad financiera, particularmente de aquellos de menor tamaño. En este contexto, el fortalecimiento del marco normativo y su efectiva implementación constituyen prioridades para mejorar las condiciones de participación en la contratación pública.

MÉXICO

En México, la reciente reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) establece un plazo máximo de 17 días hábiles para la realización de pagos, introduciendo mayor certeza jurídica al precisar que el cómputo inicia a partir de la verificación de la factura. Este cambio elimina ambigüedades previas y permite a los proveedores exigir el pago de intereses en caso de incumplimiento.

La publicación del Reglamento de la LAASSP fortaleció este nuevo marco normativo al desarrollar las disposiciones incorporadas mediante la reforma y establecer mecanismos operativos para su implementación. En particular, incorpora disposiciones orientadas a agilizar los procesos relacionados con la gestión y liberación de pagos, promover el pago oportuno y los anticipos cuando resulten procedentes, así como brindar mayor certeza jurídica tanto a las instituciones contratantes como a las personas proveedoras durante la ejecución de los contratos.

Sin embargo, el país enfrenta importantes desafíos estructurales para garantizar la efectividad de estos plazos. La heterogeneidad institucional, caracterizada por la coexistencia de múltiples dependencias y entidades con distintos niveles de autonomía, dificulta la implementación de sistemas financieros unificados y la coordinación interinstitucional.

Asimismo, persisten cargas administrativas y retos de coordinación en los procesos, particularmente en la validación de facturas, lo que genera retrasos innecesarios. Desde la perspectiva de sostenibilidad, se identifican barreras adicionales, ya que los proveedores prioritarios —como las mipymes y organizaciones del sector social— enfrentan limitaciones en el conocimiento de los procedimientos administrativos requeridos para la gestión de pagos, para lo cual, se ha creado la plataforma de capacitación y acompañamiento para la proveeduría: Aprende y Vende.





Análisis comparado transversal: mecanismos de pronto pago

Habilitadores normativos



El análisis comparado muestra que todos los países cuentan con avances en materia normativa, aunque con distintos niveles de obligatoriedad y desarrollo. Chile destaca por la existencia de plazos claramente definidos, sanciones explícitas y la prohibición de prácticas contractuales abusivas, lo que configura un marco regulatorio integral.

Brasil incorpora disposiciones normativas que, combinadas con herramientas operativas, permiten establecer plazos significativamente más cortos para el pago, mientras que México ha avanzado en el ámbito normativo, y ahora transita hacia la implementación de los cambios en la ley y normatividad secundaria. El reto es incorporar de forma oportuna a mipymes y organizaciones del sector social como proveedores de gobierno.

Costa Rica, por su parte, cuenta con una iniciativa legislativa para habilitar pagos anticipados con el fin de fortalecer su marco legal mediante iniciativas orientadas a reducir los plazos de pago y proteger a los proveedores, particularmente a las mipymes.

En términos generales, los habilitadores normativos en la región avanzan hacia una mayor claridad, exigibilidad y protección de los proveedores, aunque su efectividad depende en gran medida de su implementación operativa.

Herramientas tecnológicas



Las herramientas tecnológicas emergen como un componente clave para la implementación efectiva del pronto pago. Chile cuenta con sistemas integrados que permiten la trazabilidad completa del proceso de pago, desde la recepción hasta la ejecución, así como mecanismos de transparencia que visibilizan el comportamiento de pago de las entidades públicas.

Brasil destaca por la incorporación de soluciones digitales innovadoras, como plataformas integradas de contratación y sistemas de pago electrónico inmediato, que reducen significativamente los tiempos de transferencia y facilitan la interacción con los proveedores.

Costa Rica avanza en el fortalecimiento de su Sistema Digital Unificado (SDU), actualmente en uso el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), con el objetivo de mejorar la trazabilidad y facilitar la gestión de los procesos de contratación y pago. México, por su parte, ha desarrollado una nueva plataforma de contratación pública llamada Compras MX que mejora la trazabilidad de los procedimientos de contratación, y, a partir de los cambios a la ley, contempla que las compras públicas sean al 100% a través de esta plataforma transaccional.

En este contexto, la digitalización y la interoperabilidad se posicionan como factores determinantes para garantizar la eficiencia, transparencia y oportunidad en los pagos.



Buenas prácticas

Entre las principales buenas prácticas identificadas se encuentra la combinación de marcos normativos robustos con herramientas tecnológicas que aseguren su cumplimiento efectivo, como en el caso de Chile. Asimismo, la implementación de sistemas de pago inmediato y plataformas integradas, como en Brasil, representa una innovación relevante para reducir tiempos y mejorar la experiencia de los proveedores.

Otra práctica destacada es la iniciativa de Costa Rica a través del proyecto de Ley, actualmente en trámite, para incorporación de mecanismos de pago anticipado, con el fin de mitigar riesgos financieros para los proveedores en etapas tempranas del contrato. En el caso de México, el desarrollo de claridad normativa sobre los plazos de pago y la identificación de barreras operativas constituyen avances importantes hacia la mejora del sistema.

Adicionalmente, se identifica como buena práctica la generación de información pública en Chile sobre tiempos de pago por cada organismo comprador, lo que fortalece la transparencia y permite a los proveedores tomar decisiones informadas.

Hallazgos clave



El análisis evidencia que el pronto pago es un factor crítico para la participación efectiva de proveedores, especialmente de aquellos de menor tamaño, y que su implementación incide directamente en la confianza en el sistema de contratación pública. Asimismo, se observa que la existencia de marcos normativos no garantiza por sí misma el cumplimiento de los plazos, siendo indispensable contar con herramientas operativas y capacidades institucionales adecuadas.

Otro hallazgo relevante es que los países que han avanzado en la digitalización de los procesos de pago presentan mejores resultados en términos de eficiencia y reducción de tiempos. Además, se identifica una relación directa entre el pronto pago y la integridad, en la medida en que la automatización y trazabilidad reducen espacios para prácticas indebidas.

Finalmente, se destaca que el pronto pago contribuye a objetivos más amplios de política pública, como la inclusión económica, el fortalecimiento de las mipymes, personas productoras y organizaciones del sector social, así como a la sostenibilidad de las cadenas de suministro.



Retos comunes

Junto con los avances, los países enfrentan desafíos comunes que limitan la efectividad de los mecanismos de pronto pago. Entre ellos se encuentra la fragmentación institucional y la falta de interoperabilidad entre sistemas, lo que dificulta la estandarización de procesos y retrasa la ejecución de pagos.

Asimismo, persisten barreras administrativas asociadas a procesos complejos de validación y aceptación de facturas, que generan demoras innecesarias. Otro reto importante es la brecha de capacidades en los proveedores, particularmente en aquellos de menor tamaño, quienes enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos administrativos.

Adicionalmente, se identifican desafíos en la implementación efectiva de sanciones y mecanismos de control, así como en la consolidación de una cultura institucional orientada al pago oportuno. Finalmente, en algunos contextos, la existencia de prácticas indebidas vinculadas a la liberación de pagos representa un riesgo significativo que debe ser abordado mediante estrategias integrales de integridad.

4.2. Contratación pública sostenible con perspectiva de género

La incorporación de la perspectiva de género en las compras públicas sostenibles constituye un componente estratégico para avanzar hacia sistemas de contratación más inclusivos, equitativos y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. La contratación pública, en tanto instrumento de política pública, tiene el potencial de corregir desigualdades estructurales mediante la promoción activa de la participación de mujeres como proveedoras, la incorporación de criterios sociales en los procesos de adjudicación y la generación de impactos positivos en el mercado laboral.

Asimismo, integrar la perspectiva de género permite atender brechas históricas en el acceso a oportunidades económicas, fortalecer la autonomía financiera de las mujeres y contribuir a la formalización de sus actividades productivas. Desde un enfoque transversal, esta perspectiva no solo implica la inclusión de criterios diferenciados, sino también el desarrollo de mecanismos de medición, verificación y seguimiento que garanticen su implementación efectiva, evitando prácticas de simulación y asegurando resultados tangibles en términos de igualdad sustantiva.



MÉXICO

En México, la incorporación de la perspectiva de género en la contratación pública se ha impulsado a partir de un enfoque transversal vinculado a la agenda anticorrupción. En este contexto, se conformó un grupo de trabajo especializado que busca integrar esta perspectiva en el diseño de políticas públicas, partiendo de un diagnóstico que identifica las condiciones estructurales de desigualdad que enfrentan las mujeres, particularmente su mayor vulnerabilidad ante prácticas de corrupción y su limitada participación como proveedoras del Estado.

Uno de los principales hallazgos es la baja participación de empresas lideradas por mujeres en la contratación pública, lo que ha motivado el desarrollo de líneas de acción específicas, incluyendo la creación de una mesa de trabajo sobre compras públicas con perspectiva de género y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, particularmente con la Secretaría de las Mujeres.

A nivel operativo, se han definido dos líneas prioritarias: el fortalecimiento del marco normativo y la construcción de criterios para identificar empresas de mujeres. Asimismo, se ha promovido el diálogo con el sector privado para explorar mecanismos de certificación y evaluación externa.

Si bien la reciente legislación en materia de adquisiciones incorpora de manera general la perspectiva de género, el principal desafío radica en su implementación efectiva. En este sentido, se ha identificado el riesgo de prácticas de simulación, como la presentación de declaraciones formales sin respaldo verificable, lo que implica priorizar el desarrollo de mecanismos de validación que aseguren la autenticidad y el impacto de los criterios de género en los procesos de contratación.

COSTA RICA

Costa Rica ha desarrollado un enfoque estructurado para incorporar la perspectiva de género en la contratación pública, enmarcado en la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) y su Reglamento y así como en el Plan Nacional de Compra Pública (PNCP) vigente desde diciembre de 2024. El Plan establece un modelo de Compra Pública Estratégica (CPE) donde se incorpora principalmente en el eje socioeconómico indicadores específicos para promover la igualdad entre hombres y mujeres en los procesos de contratación. Para su implementación, se han realizado mejoras en el Sistema Digital Unificado (SDU), lo que permite integrar estos criterios desde la elaboración de los pliegos y dar seguimiento a su cumplimiento durante la ejecución contractual.



En términos operativos, el país cuenta con instrumentos de orientación, como Manual de implementación de las Compras Públicas Estratégicas, Guías de Criterios Ambientales, Criterios de Innovación y Criterios Sociales y Económicos, así como una Caja de Herramientas que incluyen criterios verificables en materia de género. Entre los mecanismos de verificación destacan sistemas de certificación y reconocimiento sociolaboral, como el SIRESOL y los sellos de igualdad emitidos por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Asimismo, en Costa Rica actualmente se desarrollan procesos de profesionalización y certificación de las Unidades de Compras, mediante programas de capacitación que buscan fortalecer las capacidades técnicas para la implementación de estos criterios. No obstante, persisten desafíos en la operativización y en la consolidación de capacidades institucionales, lo que ha motivado el desarrollo actualmente de una Política de Compra Pública Estratégica. En este mismo proceso, se encuentra la Certificación de Idoneidad para las personas servidoras públicas que participan en los procedimientos de contratación pública.



COLOMBIA

Colombia presenta un marco robusto en la región para la incorporación de la perspectiva de género en la contratación pública, combinando instrumentos normativos, operativos y tecnológicos. La normativa establece criterios claros para identificar emprendimientos y empresas de mujeres, basados en la propiedad, la participación en cargos directivos y la trayectoria empresarial, los cuales deben acreditarse durante un periodo mínimo para evitar prácticas de simulación.

Estas empresas acceden a beneficios concretos en los procesos de contratación, como puntajes adicionales, requisitos habilitantes diferenciados y condiciones especiales en materia de experiencia y garantías, lo que facilita su participación efectiva en el mercado público. Asimismo, se han incorporado mecanismos complementarios, como la posibilidad de participación parcial en contratos adjudicados a grandes empresas y la inclusión de cláusulas sociales que promueven la equidad de género.

En el ámbito de herramientas, Colombia cuenta con guías especializadas que sistematizan el marco normativo y orientan su aplicación práctica, así como con funcionalidades en la plataforma SECOP que permiten identificar y analizar la participación de empresas de mujeres. Este enfoque se complementa con el desarrollo de estudios de mercado que monitorean la participación femenina en la contratación pública.

De manera adicional, el país ha integrado la perspectiva de género en la ejecución contractual, mediante la incorporación de cláusulas y protocolos para la prevención de violencias basadas en género, consolidando un abordaje integral que trasciende la etapa de adjudicación.

ECUADOR



En Ecuador, la incorporación de la perspectiva de género en la contratación pública se encuentra en una etapa inicial de implementación, derivada de recientes desarrollos normativos. Actualmente, el país se encuentra en un proceso de análisis jurídico y adecuación institucional para integrar estos criterios en sus sistemas de contratación.

Los avances incluyen ejercicios preliminares de análisis estadístico para identificar la participación de mujeres en la contratación pública; sin embargo, existen limitaciones importantes en los sistemas de información, particularmente en la capacidad de desagregar datos relacionados con la composición de las empresas y la representación legal, lo que dificulta una medición precisa.

Los primeros resultados evidencian una baja participación femenina, lo que ha impulsado la identificación de estrategias para promover su inclusión. En este sentido, se han establecido vínculos con otras iniciativas gubernamentales, como programas orientados a generar entornos laborales seguros para las mujeres.

El principal reto identificado es la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y desarrollar instrumentos operativos, como lineamientos e instructivos, que permitan una implementación efectiva de la normativa. Asimismo, el país busca integrar la perspectiva de género dentro de un enfoque más amplio de "mejor valor por dinero", alineado con criterios de sostenibilidad.

CHILE



Chile cuenta con una trayectoria consolidada en la incorporación de la perspectiva de género en la contratación pública, posicionándola como una herramienta estratégica de política pública. Dado que las compras públicas representan un porcentaje significativo del PIB, el país ha impulsado desde hace más de una década diversas iniciativas orientadas a promover la participación de las mujeres como proveedoras del Estado.

Entre las principales acciones destacan la realización de diagnósticos, reformas normativas, emisión de directrices para entidades compradoras, programas de capacitación y campañas de difusión. Asimismo, se ha desarrollado el "Sello Empresa Mujer", que permite identificar a empresas lideradas por mujeres e incorporar, en los pliegos de contratación criterios de evaluación verificables que fomenten su participación en el mercado de las compras públicas, así como el monitoreo estadístico de sus transacciones dentro de éste. Desde el año 2023, además, este sello es entregado de manera automática mediante validación en línea con las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El país también ha innovado en la medición de resultados, mediante la creación de un Índice de Participación con Perspectiva de Género en Compras Públicas, que evalúa de manera multidimensional las brechas existentes en términos de participación, adjudicación y montos contratados. Este índice ha evidenciado avances graduales, aunque persisten brechas significativas que requieren atención.

La experiencia chilena se caracteriza por su enfoque integral, que combina instrumentos normativos, herramientas tecnológicas y mecanismos de monitoreo, permitiendo una implementación más robusta y sostenida de la perspectiva de género en la contratación pública.

BRASIL

Brasil ha incorporado la perspectiva de género en la contratación pública principalmente a través de acciones afirmativas vinculadas a la dimensión social de la sostenibilidad, en el marco de su Ley General de Licitaciones y Contratos Administrativos. Estas acciones buscan generar impactos directos en la inclusión laboral y la equidad de género.



Uno de los mecanismos más relevantes es la reserva de plazas laborales para mujeres en situación de violencia en contratos de servicios tercerizados, estableciendo un porcentaje mínimo de participación. Esta medida tiene como objetivo promover la autonomía económica de las mujeres como estrategia para enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

Adicionalmente, se han incorporado criterios de desempate que favorecen a empresas que implementan acciones de equidad de género, reconociendo certificaciones y sellos nacionales e internacionales en esta materia. Este enfoque permite incentivar buenas prácticas empresariales sin restringir la competencia.

El modelo brasileño también incluye medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales en contratos públicos, así como la obligatoriedad de incorporar cláusulas para la prevención de la discriminación, el acoso y la violencia laboral. Estas disposiciones se articulan con políticas nacionales más amplias, como la Política Nacional de Cuidados.

En conjunto, la experiencia de Brasil refleja un enfoque orientado a la implementación de medidas concretas con impacto directo, complementado por acciones de capacitación, acompañamiento técnico y desarrollo de herramientas operativas.



Habilitadores normativos

En el ámbito normativo, se observa una tendencia regional hacia la formalización de la perspectiva de género como un componente de la contratación pública estratégica. Países como Colombia cuentan con marcos jurídicos robustos que establecen criterios claros y verificables para identificar empresas de mujeres y otorgarles beneficios diferenciados en los procesos de contratación. De manera similar, Chile ha desarrollado directrices y normativa secundaria que permiten institucionalizar mecanismos como el "Sello Empresa Mujer".

Por su parte, Costa Rica ha incorporado consideraciones de igualdad de género en el eje socioeconómico de su Plan Nacional de Compra Pública, dentro del marco de la Compra Pública Estratégica habilitado por la Ley General de Contratación Pública (LGCP), Ley N° 9986. Aunque el país dispone de un Manual de implementación de las Compras Públicas Estratégicas y la Guía de Criterios Sociales y Económicos para las Compras Públicas Estratégicas y mecanismos de verificación, persisten desafíos en la aplicación uniforme de los criterios y en la medición de sus resultados, mientras que México ha avanzado en su inclusión a nivel legal, aunque enfrenta el reto de traducir estos principios en lineamientos operativos claros. En Ecuador, la normativa es reciente, por lo que el país se encuentra en una fase inicial de implementación.

En conjunto, estos habilitadores normativos reflejan un reconocimiento creciente del papel de la contratación pública como instrumento para promover la igualdad de género, aunque con distintos niveles de madurez en su desarrollo.

Herramientas tecnológicas

Las herramientas tecnológicas juegan un papel clave en la implementación, monitoreo y evaluación de la perspectiva de género en las compras públicas. En este ámbito, destacan los avances casos de Chile y Colombia, que han incorporado funcionalidades específicas en sus plataformas electrónicas para identificar la participación de empresas lideradas por mujeres y generar datos estadísticos.

Chile ha desarrollado un índice multidimensional que permite medir las brechas de participación femenina, mientras que Colombia ha integrado marcadores en su sistema de contratación para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones. Costa Rica también ha avanzado en la implementación de mejoras técnicas en su Sistema Digital Unificado (SDU) para incorporar y monitorear criterios de género en los procesos de contratación.



En contraste, países como Ecuador enfrentan limitaciones en sus sistemas de información, particularmente en la capacidad de desagregar datos relevantes, lo que restringe el análisis y seguimiento de la participación femenina. México, por su parte, se encuentra en una etapa de fortalecimiento de sus herramientas, con énfasis en la generación de información y la trazabilidad de los criterios de género.

Buenas prácticas

El análisis comparado permite identificar diversas buenas prácticas replicables en la región. Entre ellas destaca el desarrollo de criterios claros y verificables para la identificación de empresas lideradas por mujeres, como en el caso de Colombia, lo que reduce el riesgo de simulación. Asimismo, el uso de sellos y certificaciones automatizadas, como el "Sello Empresa Mujer" en Chile, facilita la implementación de prácticas focalizadas en el fomento a la participación de mujeres en el mercado de las compras públicas y reduce cargas administrativas.

Otra buena práctica relevante es la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución contractual, mediante cláusulas específicas para prevenir la violencia y promover condiciones laborales equitativas, como se observa en Colombia y Brasil. De igual forma, la implementación de acciones afirmativas con impacto directo, como la reserva de empleo para mujeres en situación de violencia en Brasil, representa un ejemplo innovador de política pública.

Finalmente, destacan las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales. Costa Rica ha desarrollado una estrategia de profesionalización, certificación de idoneidad y capacitación continua del personal, así como de acreditación de las unidades de compra, conforme a la Ley General de Contratación Pública. Este marco puede contribuir a mejorar la formulación, verificación y seguimiento de criterios sociales y de igualdad de género. También resultan relevantes la elaboración de manuales y guías, así como la generación de espacios de intercambio técnico entre los países.

Hallazgos clave



Entre los principales hallazgos del análisis comparado destaca que, si bien existe un avance significativo en el diseño normativo, persisten brechas importantes en la implementación efectiva de la perspectiva de género en la contratación pública. La baja participación de empresas lideradas por mujeres es una constante en la región, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de inclusión.

Asimismo, se identifica que los países con más resultados combinan múltiples herramientas, incluyendo incentivos, mecanismos de verificación y sistemas de información robustos. Otro hallazgo relevante es la creciente incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo de la contratación pública, incluyendo la ejecución contractual, lo que amplía su impacto más allá de la adjudicación.

Finalmente, se observa que la generación de datos y evidencia es un factor determinante para el diseño de políticas públicas más efectivas, lo que posiciona a los sistemas de información como un elemento estratégico en esta agenda.



Retos comunes

A pesar de los avances, los países enfrentan desafíos compartidos que limitan la consolidación de la perspectiva de género en las compras públicas. Uno de los principales retos es el riesgo de simulación, derivado de la ausencia de mecanismos robustos de verificación, lo que puede traducirse en el cumplimiento formal de requisitos sin impactos reales.

Otro desafío relevante es la limitada disponibilidad y calidad de datos, especialmente en países con sistemas de información menos desarrollados, lo que dificulta la medición de resultados y la toma de decisiones basada en evidencia. Asimismo, persisten desafíos en la articulación interinstitucional, necesaria para alinear a las entidades de contratación con organismos especializados en igualdad de género.

Adicionalmente, se identifican limitaciones en las capacidades técnicas de las unidades de compra para implementar criterios de género, así como barreras estructurales que enfrentan las empresas lideradas por mujeres, como el acceso a información, financiamiento y procesos administrativos.

En este contexto, el principal desafío regional consiste en avanzar de la incorporación normativa hacia la operación efectiva de la perspectiva de género, mediante el desarrollo de instrumentos claros, mecanismos de verificación, sistemas de información integrados y estrategias de acompañamiento que permitan generar impactos sostenibles en la igualdad de género a través de la contratación pública.

4.3. Modelos de acompañamiento a proveedores e integridad empresarial

Los modelos de acompañamiento al desarrollo de proveedores, junto con el fortalecimiento de la integridad empresarial, constituyen pilares fundamentales para consolidar sistemas de compras públicas sostenibles, inclusivos y eficientes. El acompañamiento permite reducir brechas estructurales que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como organizaciones del sector social al facilitar su acceso al mercado público mediante capacitación, asistencia técnica y orientación en procesos administrativos. Al mismo tiempo, la promoción de la integridad empresarial contribuye a garantizar que dicha participación se desarrolle en condiciones de transparencia, ética y cumplimiento normativo, fortaleciendo la confianza entre el Estado y los proveedores. La articulación de ambos elementos no solo amplía la base de proveeduría y mejora la calidad de la oferta, sino que también reduce riesgos de corrupción, fomenta la competencia leal y asegura que la contratación pública genere impactos económicos, sociales, culturales y ambientales positivos y sostenibles.

BRASIL

Brasil posiciona la contratación pública como un instrumento estratégico de política pública, con un fuerte énfasis en la planificación y en su contribución al desarrollo nacional sostenible.

A partir de la Ley nº 14.133/2021, se establece como eje rector el principio de planificación, incorporando de manera explícita el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.

En materia de integridad, el marco normativo prevé la exigencia de programas de integridad en contrataciones de gran cuantía, los cuales pueden constituir un criterio de desempate en los procesos de licitación. Este enfoque combina incentivos para la adopción de buenas prácticas con mecanismos de evaluación dentro del proceso de contratación.

Asimismo, Brasil cuenta con instrumentos consolidados para la inclusión de micro y pequeñas empresas, como la Ley Complementaria 123 de 2006, que establece cuotas reservadas, y plataformas como “Contrata Mais Brasil”, orientadas a incorporar proveedores tradicionalmente excluidos, incluyendo microemprendedores y agricultores familiares.



MÉXICO



En México, se observa una transición hacia la concepción de la compra pública como una palanca de desarrollo económico y social. Si bien el marco normativo previo ya contemplaba mecanismos para favorecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, su implementación ha sido poco efectiva, ya que la normatividad anterior las ponía, por ejemplo, a competir con las mismas condiciones que a una gran empresa.

La reciente reforma a la Ley de Adquisiciones introduce habilitadores para fomentar la participación de organizaciones del sector social, incluyendo la posibilidad de diseñar procesos de contratación específicos para estos sectores.

A nivel operativo, destaca la implementación de un modelo de acompañamiento cercano a proveedores, basado en el diagnóstico de su nivel de madurez a través de la plataforma "Aprende y Vende". Este enfoque busca atender barreras estructurales como la falta de capacidades administrativas, el desconocimiento de los procesos de contratación y la baja confianza hacia el gobierno.

En materia de integridad, México se encuentra en una etapa de diseño de lineamientos para incorporar la integridad de los proveedores como un mecanismo que sume en evaluaciones por puntos y porcentajes, enfrentando el reto de definir criterios objetivos de evaluación y mecanismos de verificación que eviten la simulación y el cumplimiento meramente formal. Con esta normatividad secundaria, en México se busca que ser íntegro cuente para ser proveedor de gobierno.

COSTA RICA



Costa Rica ha incorporado la integridad en el subsistema de compras públicas a partir del Principio de integridad, en su artículo 8, de la Ley General de Contratación Pública N °9986, y desarrollado como un eje transversal en el Plan Nacional de Compras Públicas para las licitaciones mayores, donde se asignan de puntajes adicionales en los pliegos de condiciones por la incorporación de criterios de integridad en licitaciones mayores. Entre los criterios destaca el aporte de políticas, códigos y charlas en el tema de integridad. Actualmente el país se encuentra desarrollando una Política de Compra Pública Estratégica que busca ampliar y consolidar este enfoque a todas las licitaciones de contratación.

Un elemento distintivo es el énfasis en la gestión de riesgos y la trazabilidad, mediante el fortalecimiento del Sistema Digital Unificado (SDU) y la iniciativa de un Proyecto de analítica de datos en contratación

pública -actualmente en desarrollo- orientados a la identificación de conflictos de interés, colusión, patrones de riesgo y al fomento del uso de los datos apoyo a la toma de decisiones.



CHILE

Chile presenta un enfoque consolidado en la implementación de mecanismos de integridad en la contratación pública, particularmente a través de los programas de integridad y ética empresarial. Estos operan en dos niveles: como cláusulas obligatorias en las bases de licitación, aceptadas por los proveedores al participar, y como requisito de admisibilidad que exige a las empresas contar con sus propios instrumentos internos de integridad.

Este enfoque se complementa con mecanismos de verificación de la implementación y conocimiento por parte de los trabajadores de dichos programas dentro de las organizaciones, así como con la previsión de sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo la ejecución de garantías o la terminación anticipada de contratos.

El modelo chileno destaca por su carácter operativo y por la incorporación efectiva de la integridad en los procesos de contratación, más allá de su reconocimiento normativo.

ANÁLISIS COMPARADO

Retos comunes



Buenas prácticas identificadas

Entre las principales buenas prácticas destacan:

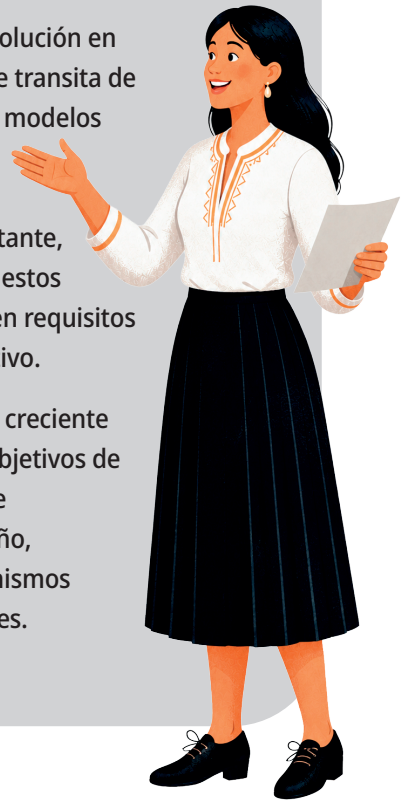
- La incorporación del principio de planificación como eje de la contratación pública (Brasil).
- Los modelos de acompañamiento directo y segmentado a proveedores (México).
- El inicio de un proyecto en analítica de datos para la identificación de riesgos y toma de decisiones en la contratación pública (Costa Rica).
- La implementación de pactos de integridad con mecanismos de verificación y sanción (Chile).

Hallazgos clave

El análisis comparado evidencia una transición regional hacia la consolidación de la compra pública como una herramienta estratégica de política pública, con capacidad para incidir en el desarrollo económico, social y ambiental.

Asimismo, se observa una evolución en el enfoque de integridad, que transita de esquemas declarativos hacia modelos que buscan incorporar mecanismos de verificación, monitoreo y sanción. No obstante, persiste el reto de evitar que estos instrumentos se conviertan en requisitos formales sin impacto sustantivo.

Finalmente, se identifica una creciente necesidad de equilibrar los objetivos de integridad con la inclusión de proveedores de menor tamaño, lo que implica diseñar mecanismos diferenciados y proporcionales.



5 Áreas de oportunidad

Pronto pago: Existe la oportunidad de fortalecer la trazabilidad de las etapas previas al pago, generar información pública sobre los tiempos efectivos por dependencia, simplificar requisitos para proveedores de menor tamaño y valorar mecanismos de anticipos o pagos diferenciados cuando exista viabilidad presupuestaria y jurídica.

Perspectiva de género: Se identifica un espacio para avanzar en la definición de criterios verificables que permitan reconocer empresas de mujeres, incorporar marcadores en los sistemas de contratación, diseñar incentivos proporcionales y extender este enfoque a la ejecución contractual, la generación de empleo y la prevención de violencias.

Acompañamiento e integridad: Los intercambios muestran la oportunidad de desarrollar rutas diferenciadas de acompañamiento según el nivel de madurez de los proveedores, procurando que los requisitos de integridad no se conviertan en barreras de entrada y que los instrumentos combinen capacitación, autodiagnóstico, evidencia y seguimiento.

Datos e interoperabilidad: El aprovechamiento de Compras MX y de otros sistemas institucionales abre la posibilidad de construir indicadores sobre inclusión, sostenibilidad, integridad y oportunidad de pago, con énfasis en la interoperabilidad, la calidad de los datos y la claridad de las responsabilidades de actualización.

Cooperación técnica: La experiencia de la Comunidad ofrece una base para articular aprendizajes, capacidades y posibles líneas de colaboración con socios técnicos y redes regionales, evitando duplicidades y procurando que cada cooperación aporte un valor agregado específico.





6 Reflexiones

Los países de la región avanzan hacia una comprensión más estratégica de la contratación pública, capaz de contribuir simultáneamente a la eficiencia del gasto, la inclusión económica, la igualdad de género, la sostenibilidad y la integridad. Sin embargo, el análisis muestra que los resultados dependen menos de la existencia aislada de una norma y más de la capacidad de articular reglas, procesos, tecnología, datos, incentivos y acompañamiento.

Las experiencias comparadas sugieren tres principios de diseño. Primero, convertir los objetivos sociales y ambientales en criterios operativos y verificables. Segundo, aplicar estándares proporcionales que no excluyan a proveedores de menor tamaño. Tercero, medir resultados y ajustar las políticas con base en evidencia.

La Comunidad Regional de Aprendizaje ofrece una plataforma idónea para continuar este trabajo.

COMUNIDAD REGIONAL
DE APRENDIZAJE EN

Compras Públicas SOSTENIBLES

Aprendizajes comparados de América Latina y el Caribe

Gobierno de México

Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno